

Palabras claves : seguridad alimentaria, políticas agrarias, reducción de la pobreza, vulnerabilidad, agricultura familiar, desarrollo económico, recursos naturales, medio ambiente.

¿Hambre en Centroamérica : Falta de lluvias o políticas erradas?

Autor : Denis Pommier d.pommier@iram-fr.org

Por tercer año consecutivo, la región Centroamericana fue afectada por factores naturales adversos, primero el Huracán Mitch en 1998 y luego las sequías de los veranos de 1999, 2000 y 2001, cuyos efectos han profundizado la tragedia humana que vive desde hace cinco siglos la mayoría de la población. Sin embargo, las causas profundas que han provocado esta dramática situación no tienen su origen en el clima sino en el sesgo anticampesino de las políticas económicas aplicadas.

Estallido de una nueva crisis regional

Según el PMA y la FAO, entre 1.4 y 1.6 millones de personas han sido afectadas por la sequía y las inundaciones en Centroamérica, de las cuales unas 800,000 personas se encuentran en una situación crítica de inseguridad alimentaria. De acuerdo con estas estimaciones, alrededor de 40,000 familias (200,000 personas) estarían afectadas en Nicaragua (de las cuales unas 12,000 dependen de su actividad asalariada en el sector café) y 50,000 familias (cerca de 300,000 personas) en Honduras, los dos países más golpeados por esta nueva crisis.

Las pérdidas de cosechas en pie, principalmente maíz y frijol, se estiman entre el 15 y el 20% de la producción anual de dichos países, lo que no constituye globalmente una catástrofe en términos de disponibilidad, pero tiene sin embargo efectos graves a nivel local en las regiones concernidas.

Aún, no se observan variaciones anormales de los precios de estos productos básicos a nivel de consumidores y estos dos países disponen de suficientes recursos en divisas para realizar importaciones de granos básicos.

Principales factores coyunturales : sequía, precio del café y... elecciones

Esta nueva crisis humana que golpea principalmente las zonas secas de Centroamérica, así como algunas regiones del Atlántico donde ocurrieron inundaciones, encuentra su origen directo en un conjunto de factores coyunturales :

- Una llegada tardía de las lluvias (fin de mayo, inicios de junio) y escasez de las mismas, aunque menos marcada que en los dos años anteriores, mientras los meses de junio, julio y agosto constituyen tradicionalmente el periodo de penuria para las familias campesinas pobres cuyas reservas de alimentos son nulas mientras esperan la cosecha de la primera siembra (julio/agosto). Como factores agravantes, se trata de la tercera sequía consecutiva en estas regiones después del desastre nacional provocado por el huracán Mitch.
- El desplome del precio internacional del café (alrededor de US50 por quintal, sea la mitad del precio de 1999), que afecta a una mayoría de productores familiares así como un reducido número de empresarios sobreendeudados y que provoca a lo inmediato una fuerte

disminución de la oferta de empleos temporales para los asalariados agrícolas (unas 30,000 familias en Nicaragua y Honduras), y por ende una disminución dramática de los ingresos de estos hogares muy vulnerables, así como para los productores familiares de café.

Estos dos factores se superponen a una situación política compleja, con la proximidad de elecciones nacionales cruciales para Nicaragua y Honduras en Noviembre 2001. En este contexto, los partidos políticos de oposición intentan obtener réditos electorales de esta nueva crisis, reclamando el recurso masivo a la ayuda alimentaria internacional, convirtiéndola así en una apuesta política de significativa envergadura.

La inseguridad alimentaria es un problema crónico y estructural !

Aunque provocada por factores coyunturales, la situación actual encuentra sus orígenes profundos en el empobrecimiento generalizado de las poblaciones rurales de la región, miseria cuyas causas deben buscarse principalmente en :

- La debilidad de las organizaciones de productores campesinos, que no tienen influencia sobre las decisiones de política económica que los conciernen.
- Un conjunto de políticas de desarrollo mal orientadas, que privilegian a una minoría de grandes empresarios agrícolas en detrimento de los productores familiares de pequeña y mediana escala mayoritarios, a pesar de que estos últimos son más eficientes en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la generación de riqueza económica y social. Estas políticas económicas se han traducido en los últimos 20 años por un marcado y sistemático aumento de la miseria en el ámbito rural, donde dos tercios de la población vive en situación de privación crónica y por ende, de negación de sus derechos humanos más elementales (derecho a la alimentación, salud, educación, entre otros).
- Un acceso cada día más desigual e injusto a los recursos productivos para las familias campesinas (tierra, servicios financieros, infraestructuras productivas y de comunicación, agua potable, educación). Estos hogares han sido paulatinamente reducidos a producir para su propia subsistencia (maíz, frijol, sorgo) en parcelas demasiado pequeñas, tierras frágiles, a menudo ubicadas en laderas y con escaso equipamiento. Mientras tanto cada vez más tierras fértiles son utilizadas para cultivos mecanizados o pastadas extensivamente, lo que genera poco empleo, demanda muchas divisas y daña al medio ambiente.
- Un deterioro constante de los precios internacionales de los alimentos y con ello de los precios a los productores, como lo evidencia el caso del trigo que ha visto su valor dividido por cuatro en las últimas décadas, consecuencia de la creciente diferencia de productividad del trabajo entre las agriculturas del norte y las agriculturas con herramientas manuales. En estas condiciones, la remuneración del trabajo de una mayoría de agricultores pobres es insuficiente para que cubran sus necesidades básicas, ni se diga para invertir en sus fincas.

Conclusiones y recomendaciones

La crisis actual no se debe tanto a la escasez y mala distribución de las lluvias, sino mayormente al deterioro creciente de las condiciones de existencia de la mayoría de los hogares rurales provocado por políticas económicas erróneas. Las mismas desprecian el valor económico y social de la agricultura familiar de pequeña escala mientras la agricultura empresarial de mediana y gran escala basada en una relación asalariada entre trabajadores y

dueños, se beneficia de medidas favorables y subsidios directos e indirectos.

*"Durante más de un siglo la corriente dominante de los economistas tanto de países socialistas como capitalistas, han pronosticado entusiasta y confidencialmente la desaparición de las pequeñas fincas familiares. Las pequeñas fincas han sido una y otra vez catalogadas como atrasadas, improductivas e ineficientes - un obstáculo a ser superado en el proceso de desarrollo económico. El modelo agrícola americano a gran escala, mecanizado y corporativo se mantiene como la mejor forma, y en ocasiones la única, de alimentar eficientemente a la población mundial. La creencia convencional ha deparado a los pequeños productores - o campesinos - exactamente la misma suerte que a los dinosaurios. Las pequeñas fincas son "multifuncionales" -más productivas, eficientes y que contribuyen más al desarrollo económico que las fincas a gran escala. Los pequeños agricultores administran mejor los recursos naturales, conservan la biodiversidad y salvaguardan la sostenibilidad de la producción."*¹

Numerosos estudios agrarios realizados durante las últimas cuatro décadas en América Latina², muestran que tanto la generación de valor agregado por unidad de superficie como la eficiencia en la generación de divisas es de 2 a 10 veces mayor en fincas familiares con tecnologías tradicionales que en grandes empresas agrícolas mecanizadas y tecnificadas que contratan mano de obra asalariada o haciendas donde se practica la ganadería extensiva. En el caso de Brasil, se ha comprobado que el costo de creación de un nuevo trabajo en el sector comercial es de 2 hasta 20 veces mayor que el costo de establecer a un ama de casa desempleada en áreas agrícolas a través de la reforma agraria.

La reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria solo pueden resultar a la postre de la aplicación de políticas nacionales apropiadas, y la definición de las mismas, depende de la capacidad de la nación de pensar con los diferentes sectores económicos en un nuevo camino hacia el progreso. Por ello es inaceptable la casi ausencia de organizaciones sociales representativas de los pobres rurales en los procesos de elaboración y aplicación de las políticas de reducción de la pobreza.

Diferentes medidas económicas serían deseables para restablecer equilibrios perdidos y orientar el desarrollo nacional de forma que sea sostenible y para lograr mayor equidad en la distribución del ingreso. Las políticas públicas podrían orientarse más claramente en favor de :

- La aplicación efectiva de un régimen fiscal que desincentive la ociosidad e ineficiencia en el uso de la tierra, así como medidas que regulen su mercado a fin de reducir la concentración de la propiedad agraria, que faciliten el acceso a la misma, incluyendo su alquiler y aumenten la seguridad de los derechos de los productores familiares.
- Una alza substancial del salario mínimo de los trabajadores rurales, los más pobres entre los pobres, que permita elevar su capacidad de consumo y satisfacción de necesidades básicas.

¹ Rosset, P. (1999). Las múltiples funciones y beneficios de la agricultura campesina , Food First.

² Cada año, tanto el Centro Internacional de Investigación Agronómica y Desarrollo (CIRAD), como el Instituto Nacional de Agronomía de París (INA-PG) como el Centro Nacional de Estudios Agronómicos de las Regiones Cálidas (CNEARC) producen decenas de diagnósticos agrarios locales en países de América Latina.

- Una política de desarrollo enfocada no solamente en la producción exportable, sino en la satisfacción de la demanda interna de bienes y alimentos, lo que implica necesariamente una protección adecuada de los productores familiares ante las importaciones de alimentos.
- El desarrollo de redes locales y regionales de servicios financieros rurales de ahorro y crédito.
- Innovaciones institucionales en la investigación y transferencia de tecnología, donde los productores sean protagonistas activos de la necesaria diversificación de la producción, lo que implica un contundente y prolongado esfuerzo de formación de recursos humanos.
- El fortalecimiento de las organizaciones gremiales y económicas a nivel local y la descentralización de las funciones de desarrollo según el principio de subsidiariedad.

“Pero todo lo anterior muestra una visión demasiado estrecha del objetivo de la redistribución de la tierra : este es más que una cuestión de eficiencia económica, o incluso de equidad medida por indicadores convencionales de bienestar social. Es parte de un cambio social e institucional más profundo, que constituye el componente central de la segunda generación de reformas. Tal y como lo argumenté anteriormente, baja inflación y empresas privadas no son suficientes para alcanzar el desarrollo. Se debe incluir el establecimiento de instituciones así como la creación y el mantenimiento del capital social. Aquí, he focalizado en la importancia de la reforma agraria, no sólo por el objetivo de incrementar la eficiencia, pero también desde la perspectiva más amplia de lograr un desarrollo avanzado.”³ ”

Por su importancia central en la solución de la pobreza, no cabe duda que las políticas públicas nacionales e internacionales en el ámbito agropecuario deberán evolucionar radicalmente para reducir la vulnerabilidad a los fenómenos naturales y a las fluctuaciones de los mercados internacionales de alimentos. Ello implicará necesariamente la rehabilitación del saber acumulado por los campesinos mesoamericanos y el fortalecimiento de sus organizaciones. De lo contrario, persistirán graves amenazas a la paz regional y con ello, resultará inalcanzable el bienestar para todos los latinoamericanos.

³ Stiglitz, J. (1998). Distribution, Efficiency and Voice: Designing the Second Generation of Reforms, World Bank